

Artículo 49

Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.

La protección específica de las personas con discapacidad como objeto directo de tutela no fue apenas objeto de debate en el proceso constituyente, debido, entre otros motivos, a la sensibilidad general e indiscutible hacia el reconocimiento constitucional de este sector específico de la población. El desarrollo de este artículo se centra en la batería de políticas asistenciales a las personas con discapacidad, adoptadas y normadas por los poderes públicos. Sus beneficiarios son "los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos" en razón de la existencia de una discapacidad que les impide o dificulta su inserción normal en las relaciones vitales habituales de la vida social. De la misma manera que es irrelevante que la discapacidad sea de nacimiento o sobrevenida, también es irrelevante, a los efectos de la protección que dispone este precepto, que la causa de la dificultad de inserción provenga de una discapacidad física o sensorial o de un problema psíquico.

En el marco de la 54ª Asamblea de la Organización Mundial de la Salud (2001), se aprobó la actual Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, que tiene como objetivo principal proporcionar un lenguaje unificado y estandarizado que sirva como punto de referencia para la descripción de la salud y los estados relacionados con la salud. Esta Clasificación abandona definitivamente el término "minusvalía" y adopta el término genérico "discapacidad" que incluye déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación, e indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una "condición de salud") y sus factores contextuales (factores ambientales y personales). También el ordenamiento jurídico español se hará eco de este nuevo enfoque, adoptando el término discapacidad para referirse globalmente a esta realidad.

Este artículo se basa en los derechos que tienen las personas discapacitadas en la sociedad actual.

Teniendo en cuenta que hay muchas ocasiones en las que no se puede prever una discapacidad creemos que habría que añadir más ayudas a estas personas y llevar a cabo proyectos sociales para la integración de la gente con dichas dificultades en la sociedad actual. En nuestra opinión el artículo 49 debería seguir siendo válido hoy en día aun habiendo pasado 40 años desde la creación de la Constitución, aunque también creemos que no está siendo aplicado correctamente y que hay muchos casos en los que no se cumple. El Estado debería preocuparse más de que este artículo fuese respetado y cumplido en cualquier situación y estas son algunas de las medidas que consideramos que se pueden aplicar:

- Incremento de becas para las personas con discapacidad para intentar equilibrar y ayudar a solventar los problemas monetarios o jurídicos al no poder actuar con el mismo grado de acción que las personas sin tales condicionantes.
- Adecuación de lugares públicos.
- Facilitación de materiales para la adecuada realización de un trabajo y así poder realizarlo como una persona sin discapacidad.

Si queremos que las personas discapacitadas sean completamente integradas en la sociedad necesitamos que esta ley se cumpla siempre promoviendo inspecciones y revisiones de lugares públicos de forma periódica para garantizar que se están llevando a cabo correctamente.

Maríel D., Adrián G., Lucía R. y Paula N. (4º ESO A/C). Rihab H., Mónica A., Andrés R., Andrea F. (1º Bachillerato A).